



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD JURÍDICA

REF.: N° 908.242/22
DSM

RECHAZA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN FORMULADA POR LA MUNICIPALIDAD DE COLINA EN CONTRA DEL OFICIO N° E245110, DE 2022.

SANTIAGO, 18 DE OCTUBRE DE 2022

I. Antecedentes

Se ha dirigido a esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago la Municipalidad de Colina, solicitando la reconsideración del oficio N° E245110, de 2022, de este origen.

Al respecto, cabe recordar que a través del anotado oficio, se concluyó, en primer lugar, que no se ajustó a derecho que dicha entidad haya utilizado a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, mediante la transferencia de recursos por concepto de subvención municipal para el área de salud, para adquirir el inmueble de que se trata, y a través de ello, prescindir de realizarlo con sujeción a lo prescrito en el artículo 9° de la ley N° 18.575, además de no contar con antecedentes que sustentaran que el precio pactado haya correspondido al justo valor comercial a pagar por aquel bien raíz, sin que resultara procedente, a su vez, que transfiriera recursos para esa finalidad, por cuanto aquello resultaba ajeno a los fines propios de esa corporación, producto de todo lo cual se dispuso la instrucción de un procedimiento disciplinario sobre la materia.

Por otra parte, se determinó que la causal invocada por el municipio para proceder a la contratación directa de la empresa Urbe Diseño y Gestión Urbana Ltda., para los fines allí mencionados, no se encontraba debidamente justificada, por las razones expuestas, lo que también debía ser objeto del procedimiento disciplinario antes mencionado; y por

**A LA SEÑORA
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE COLINA
PRESENTE**

DISTRIBUCIÓN:

- Recurrentes.
- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina.
- Consejo de Defensa del Estado.
- Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa, I Contraloría Regional Metropolitana.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD JURÍDICA

2

último, se expresó que no resultaba posible la construcción de un Hospital en la Zona Norte de la Región Metropolitana, en el inmueble en comento, en tanto no se modificara el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

En esta oportunidad, la municipalidad alude que esta Entidad de Control no habría tenido a la vista ciertos antecedentes y consideraciones, señalando, en síntesis, que el terreno en cuestión habría sido propuesto luego de que la Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitara a distintos municipios proporcionar un terreno para construir el Hospital de la Zona Norte, en la modalidad de donación, siendo seleccionado por las condiciones que presentaba y anunciado públicamente por el entonces Jefe de Gobierno, luego de lo cual se habrían iniciado las gestiones para poner el inmueble a disposición del Fisco, entre ellas, la suscripción de un convenio de colaboración con la corporación municipal de esa comuna, por tener la administración y operación de los servicios de salud ubicados en ella, así como otras gestiones con otros órganos de la Administración del Estado.

Agrega, en tal sentido, que no es efectivo que se haya utilizado a la aludida corporación municipal para tal finalidad, sino que se consideró que era más conveniente que dicha entidad gestionara la compra y posterior donación del inmueble, todo lo cual habría contado con acuerdo del concejo municipal, además de señalar que no habría podido adquirirlo a través de licitación pública, por haber sido escogido por el entonces jefe de gobierno, y que en cuanto al precio, su monto habría sido fijado por la propia vendedora, informándose de aquel a las autoridades involucradas.

Por último, expresa que suscribió un convenio con la Secretaría Regional Metropolitana de Vivienda y Urbanismo para llevar a cabo un estudio de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, comprometiéndose el municipio a contratar una asesoría técnica para la realización del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, para lo cual celebró un trato directo con la empresa Urbe Diseño y Gestión Urbana Ltda, invocando la causal prevista en el artículo 10, N° 7, letra m) del decreto N° 250, de 2004, en relación con lo dispuesto en el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, indicando que sí se habría dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 107 del aludido reglamento, por los motivos y antecedentes que señala.

De lo expuesto, se desprende que la Municipalidad de Colina solicita la reconsideración de lo concluido en los acápites II. "Sobre la adquisición del inmueble destinado a la construcción del Hospital Zona Norte", y III. "Sobre el trato directo celebrado para el estudio de evaluación ambiental estratégica", del oficio impugnado.

Habiéndose remitido la presentación a los interesados que formularon las presentaciones que dieron origen al

pronunciamiento impugnado, en lo que respecta a dichos acápite, para que manifestaran lo que estimaren pertinente, no se han pronunciado a la fecha.

II. Sobre la adquisición del inmueble destinado a la Construcción del Hospital Zona Norte

1. Fundamento jurídico

Sobre el particular, cabe reiterar que entre las atribuciones de las municipalidades se encuentra la de adquirir inmuebles, la que le corresponde ejercer al alcalde con acuerdo del concejo y para cuyo efecto son aplicables las normas del derecho común, conforme con lo previsto en los artículos 5°, letra f), 33 y 65, letra f), de la ley N° 18.695.

A su vez, según lo preceptuado en el artículo 9° de la ley N° 18.575, los contratos administrativos -entre los cuales se encuentran aquellos de compraventa de inmuebles, de acuerdo a lo precisado en los dictámenes N°s. 57.215, de 2006, y 75.620, de 2012-, se celebrarán previa propuesta pública, de conformidad con la ley, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a la licitación privada, previa resolución fundada que así lo requiera y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación así lo requiera.

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo manifestado en el dictamen N° 33.465, de 2013, tratándose de adquisiciones de inmuebles por parte de un organismo de la Administración del Estado, a fin de determinar el precio que se pagará, es necesario disponer de antecedentes que permitan a la autoridad sustentar el justo valor comercial de los bienes raíces, para lo cual deberán requerirse las valoraciones comerciales externas practicadas por profesionales especializados en la materia, o por entidades financieras.

Por su parte, tal como se consignó en el oficio impugnado, los dictámenes N°s. E68317 y E160316, ambos de 2021, han expresado que en el ejercicio de sus funciones y en resguardo del interés público comprometido, las autoridades y trabajadores de las corporaciones municipales deben observar los principios de eficiencia y eficacia, consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, lo que les obliga a velar por la eficaz e idónea administración de los recursos públicos.

En tal contexto, los alcaldes de las municipalidades, al ejercer la presidencia de las referidas corporaciones, deben someterse a los principios que rigen el desempeño de la función pública, especialmente los de juridicidad y probidad, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental; 2° y 52 de la ley N° 18.575; y 40, inciso final, de la ley N° 18.695, arbitrando las medidas tendientes a que la

actuación de los distintos agentes que intervienen en la gestión municipal se desarrolle dentro del marco jurídico vigente.

Por otro lado, es dable recordar que resulta procedente que las municipalidades otorguen subvenciones a los organismos señalados en el artículo 5°, letra g), de la ley N° 18.695 -entre los cuales se encuentran las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro-, siempre que los beneficios que se obtengan estén entre los fines a los que debe contribuir la institución receptora (aplica criterio contenido en el dictamen N° 32.977, de 2015).

2. Análisis y conclusión

Pues bien, de las alegaciones formuladas por la entidad comunal, se advierte que aquellas ya fueron ponderadas en su oportunidad por esta Sede Regional de Control, como asimismo, los antecedentes que proporciona, tales como el convenio de colaboración suscrito con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina y el informe relativo al proceso de evaluación de terrenos para la construcción del Hospital de que se trata, sin aportar antecedentes sustanciales que permitan modificar lo resuelto por este Órgano Fiscalizador en el oficio impugnado.

En consecuencia, no cabe sino reiterar lo concluido en el oficio N° E245110, de 2022, en cuanto a que no se ajustó a derecho que el municipio haya utilizado a la corporación municipal ya aludida, mediante la transferencia de recursos por concepto de subvención para el área de salud, para adquirir el inmueble en cuestión, prescindiendo de realizarlo con arreglo a lo previsto en el artículo 9° de la ley N° 18.575, y sin contar con antecedentes que sustentaran que el precio pactado se haya correspondido al justo valor comercial a pagar, así como tampoco, que tales recursos se transfirieran para ser destinados a dicha adquisición, por resultar ajeno a los fines propios de esa corporación.

En relación con lo anterior, resulta pertinente precisar que la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 18.575, no implica que la adquisición de que se trata deba realizarse necesariamente mediante una licitación pública, sino que en la medida que se estime procedente recurrir al trato directo, se efectúe mediante un acto administrativo debidamente fundado.

Por consiguiente, en atención a lo expuesto, se rechaza la solicitud de reconsideración deducida por la Municipalidad de Colina, en lo que respecta a este punto.

III. Sobre el trato directo celebrado para el estudio de evaluación ambiental estratégica

1. Fundamento jurídico

En lo que respecta a este punto, es menester recordar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, procederá la contratación directa, cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de esa ley.

En tanto, el artículo 10, N° 7, letra m), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio del Interior, establece que procederá el trato o contratación directa cuando se trate de la contratación de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de dicho reglamento.

En relación con lo anterior, el inciso tercero del citado artículo 107, previene que la resolución que autorice esa clase de trato directo deberá señalar la naturaleza especial del servicio requerido, la justificación de su idoneidad técnica y la conveniencia de recurrir a ese tipo de procedimiento, la que deberá publicarse en el Sistema de Información, exigiendo, a su vez, la realización de ciertos actos preliminares que indica.

Por tanto, tal como se consignó en el oficio recurrido, dicha modalidad de contratación procede si se trata de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, previa verificación de la idoneidad del proveedor, correspondiendo que, en tal caso, se dicte una resolución fundada que la autorice, la que deberá hacer mención a la naturaleza especial de los servicios, como también a la conveniencia de recurrir a este tipo de procedimiento, sin perjuicio de realizarse las acciones preliminares al acuerdo que se prevén en el inciso tercero del citado artículo 107 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio del Interior (aplica criterio contenido en el dictamen N° 9.605, de 2019).

2. Análisis

Cabe recordar que mediante decreto alcaldicio N° E-575, de 2020, la Municipalidad de Colina autorizó el trato directo con la empresa Urbe Diseño y Gestión Urbana Ltda., fundado en la causal del artículo 10, N° 7, letra m), del citado decreto N° 250, de 2004, en relación a lo dispuesto en el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, por tratarse de un monto inferior a 1.000 UTM.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD JURÍDICA

6

En relación a dicha contratación, el oficio impugnado expresó que si bien se advertía que el monto del servicio contratado permitía configurar la causal de trato directo invocada, la entidad comunal no dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos en el artículo 107 de dicho reglamento, toda vez que no constaba que previamente haya obtenido un presupuesto o estimación referencial del valor del servicio a requerir, así como tampoco que en el acto administrativo que autorizaba la contratación se señalara la naturaleza especial del servicio requerido, la justificación de la idoneidad técnica del proveedor ni la conveniencia de recurrir a ese tipo de procedimiento, sumado a que tampoco constaba que dicho acto se publicara en el sistema de información de Mercado Público, sino únicamente en el sitio web del municipio.

En esta oportunidad, la municipalidad acompaña los términos de referencia subidos al portal de Mercado Público, que darían cuenta de los requerimientos de los servicios a contratar y las competencias requeridas al proveedor; del certificado de disponibilidad presupuestaria, que a su parecer acreditaría que se habría elaborado un presupuesto del servicio a requerir; y de una captura de pantalla de la invitación de servicios especializados efectuada en dicho portal, que permitiría acreditar la experiencia técnica de la empresa contratada, además de la oferta económica propuesta; antecedentes que ya fueron proporcionados previamente por el municipio, y por tanto, ponderados al momento de emitirse el oficio impugnado.

De este modo, cabe reiterar que el decreto alcaldicio que autorizó el trato directo en comento no cumple con aquellas exigencias previstas en el citado artículo 107 del reglamento de la ley N° 19.886, recién mencionadas.

En tal sentido, no consta que la entidad comunal haya obtenido un presupuesto referencial del valor del servicio a requerir, sino únicamente el valor propuesto por la empresa contratada, como tampoco que el decreto alcaldicio haya consignado la naturaleza especial del servicio requerido, dado que se señaló que consistía en el servicio de “asesoría y sistema de gestión en cementerio”, no correspondiendo al servicio contratado; que en dicho acto administrativo únicamente se consignó que la empresa contaba con la expertiz requerida y que se había verificado su idoneidad, sin advertirse justificación alguna; y que tampoco se justificó la conveniencia de recurrir a ese tipo de contratación.

Por último, cabe hacer presente que el hecho de haberse subido al portal de Mercado Público el contrato respectivo, con el fin de subsanar tal observación, también consignada, no altera su incumplimiento previo, así como tampoco las demás observaciones formuladas.


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD JURÍDICA

7

3. Conclusión

En consecuencia, al no encontrarse debidamente justificada la aludida causal para proceder a la contratación directa de la empresa Urbe Diseño y Gestión Urbana Ltda., sumado a que no se aportan nuevos antecedentes que permitan alterar lo concluido en el oficio N° E245110, de 2022, de este origen, se rechaza la solicitud de reconsideración deducida, en lo que respecta a esta materia.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	RENE MORALES ROJAS	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	18/10/2022	
Código validación	O2kZXbqoP	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	